

Bolivia: el rediseño violento de la sociedad global

Torrico, Erick Rolando

Un cuatrienio - 1985-1989 - ha resultado aparentemente suficiente para remodelar la realidad boliviana, cuya contemporaneidad había sido configurada por la revolución capitalista modernizadora de 1952. Sin embargo, como todo proceso de reorientación de moldes sociales, económicos, políticos y culturales, éste también ha supuesto la utilización de recursos violentos o, más bien, de la violencia como recurso de convencimiento, implantación y defensa (o agresión). Se explica aquí las razones del cambio intrasistémico iniciado en 1985, las formas de su manifestación violenta y «naturalizada» y sus repercusiones en los sectores opositoristas. El «nuevo modelo económico» instaurado por el ex-presidente Víctor Paz Entenssoro es, según este examen, el eje de la violencia pasada (y venidera) que, hasta ahora, ha constatado su aprovechabilidad para la refundación del capitalismo en Bolivia, de acuerdo con las líneas maestras de la lógica neoconservadora.

«Como era previsible, los riesgos se vuelven argumentos para las conciencias encorbardecidas que, en nombre de la realidad y de la paz en general, postulando una soberanía intocada (porque no se realiza), proponen otra vez el renunciamiento y la semiexistencia, la negociación y el miedo espeso de una adolescencia histórica supervisada e interminable, no más que para evadirse del nudo cierto y a menudo terrible de las cosas».

René Zavaleta M., 1967.

En los últimos cuatro años, la sociedad global boliviana ha experimentado un tránsito hacia la violencia de la democracia desde aquella «democratización de la violencia» que había signado el principio de la revolución nacionalista de 1952¹.

¹El concepto de «democratización de la estructura de la violencia» es empleado por Raúl Barrios (1985), que caracteriza esa transferencia del control del aparato coercitivo estatal del «ejército represor» a las «masas» con tres rasgos principales: la comunión del pueblo y las armas, la redefinición del enemigo y la conversión del pueblo en factor militar determinante; pero también tiene que ver con la movilización campesina que acompañó a la guerra de guerrillas contra la dominación española y que René Zavaleta (1986) llamó la «democracia en armas».

En esa oportunidad, el policlasista Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) encabezó la derrota armada del Estado minero-terrateniente y, para ello, depositó el control de la coerción en manos de los sectores medios y el proletariado minero y fabril, que destruyeron al ejército-gendarme de los «barones del estaño»².

El aparato de violencia, entonces, fue temporalmente apropiado por los trabajadores que, sin embargo, inconscientes de su fuerza, o por un «complejo de inferioridad de masa»³, prefirieron no jugar un papel protagónico decisivo en la transformación revolucionaria, y en menos de cincuenta meses se vieron obligados, tras la reconstitución de las fuerzas armadas y las paulatinas concesiones del régimen a las directrices washingtonianas, a atrincherarse, cada vez a mayor distancia, en el seno de la Central Obrera Boliviana (COB).

Desde entonces, esa separación antagónica continuó su curso y se vio expresada de manera permanente, cuando menos hasta 1982, en un enfrentamiento directo entre la COB y el ejército recompuesto, pues aquella, en cierta medida, cumplió las funciones de «partido sustituto» y, por ende, de mediador principal entre la sociedad y el Estado, el cual, a su vez, le oponía la fuerza armada por toda razón.

Luego de casi decenios de transitorios gobiernos uniformados⁴, el reencuentro con la escasa práctica democrática anterior hizo presumir inicialmente una reiteración del momento constitutivo de 1952. No obstante, las nuevas condiciones reinantes -referidas sobre todo al distinto contenido de clase del sector dominante, a la presencia de un ejército profesionalizado, a la ausencia de un proyecto popular y la errada lectura de la situación hecha por el movimiento obrero y los partidos de izquierda - desembocaron en un período de crisis real, que sentó las bases de un reordenamiento general. Este supuso la marginalización opositora, la desestructuración del obrerismo organizado, la desestabilización progresiva y el reagrupamiento, con plan de largo plazo incluido, de las más importantes fracciones terciarias de la dominación.

²Simón I. Patiño, Félix Avelino Aramayo y Mauricio Hochschild fueron considerados así por el poder económico y también político que lograron concentrar, gracias a la explotación y comercialización estañífera privadas que detentaron, hasta la nacionalización de las minas en octubre de 1952.

³Ese complejo se explica por un «instinto de lo servil» que bloquea el acceso directo de la plebe al poder, pues, para ello, «lo plebeyo debe adquirir una expresión señorial» (ver Zavaleta, 1983).

⁴Con el derrocamiento del tercer gobierno consecutivo del MNR, en noviembre de 1964, comenzó un largo encadenamiento de autoritarismos que, tras los intentos democratizantes de 1978 a 1980, fue superado con la asunción de la Unidad Democrática y Popular, de Hernán Siles Zuazo, en octubre de 1982.

Y esa serie de modificaciones registradas, que tuvo contornos de radicalidad dentro de la permisibilidad del sistema, se tradujo igualmente en el cambio de la mediación cobista por la político-partidaria y parlamentaria, y se sustentó en diversos niveles de violencia que, hasta ahora, como prueba de la eficacia del rediseño dirigido otra vez por el MNR y bajo el mismo liderato (el de Víctor Paz Estenssoro), y también el grado de deterioro orgánico en que se encuentran los sectores populares, sólo ha tenido al frente una protesta social desarticulada y en no pocos casos una conducta de aceptación pasiva.

La «rutinización» de la violencia

La historia republicana de Bolivia - 1825 en adelante - se caracterizó por una inestabilidad política resultante de pugnas en pos de una hegemonía nunca alcanzada. Sin embargo, ese clima de conflictividad, de constante irresolución, se vivió de modo más intenso en los treinta y tres años posteriores a la revolución nacionalista, lapso en el que la violencia tuvo diferentes manifestaciones, pese a que las más fueron de índole represiva.

La creación de campos de concentración, el funcionamiento de policías políticas de denominaciones varias⁵, la puesta en vigor de las leyes de Seguridad del Estado y de Servicio Civil Obligatorio, la instalación de «casas de seguridad» y la creciente tendencia militar a la intervención y la impunidad en los asuntos públicos, señalaron hitos fundamentales de los gobiernos del MNR (1952-1964) y, entre otras, de las dictaduras del general René Barrientos (1964-1969), del coronel Hugo Bánzer Suárez (1971-1978) y del ex-general Luis García Meza (1980-1981).

De todas maneras, en la totalidad de esos casos, el ejercicio coactivo oficial era dotado de argumentaciones y actos «institucionales» o, por el contrario y en la mayoría de las ocasiones, además de con los rasgos anteriores, se llevaba a cabo subrepticamente y sus efectos eran conocidos por la vía del rumor (intencional o surgido de algún desliz).

⁵El MNR instaló centros de reclusión, tortura y desaparición en las ciudades y áreas rurales y creó el Control político al mando de Claudio San Román, un sargento raudamente ascendido hasta coronel de ejército. Barrientos aprobó la Ley de Seguridad del Estado; Bánzer operó con el Departamento de Orden Político y la Ley del Servicio Civil Obligatorio, y García Meza, que mantuvo por más de un año una estricta censura de prensa y estuvo apoyado por bandas paramilitares protectoras de los narcotraficantes y dirigidas por el «carnicero de Lyon», Klaus Barbie, y por el ex-coronel boliviano Luis Arce Gómez, prófugo de la justicia y conocido como «el ministro de la cocaína», constituyó el Servicio Especial de Seguridad.

El hecho peculiar que se desprendía de esas circunstancias, genéricamente, era el repudio colectivo a la violencia gubernamental encubierta o no, sentimiento éste que se acumulaba al mismo tiempo que se difundía y que era exteriorizado coordinadamente en coyunturas específicas en que la centralidad obrera (vanguardizada por el actualmente esmirriado proletariado minero) desempeñaba papeles protagónicos.

Las cosas han cambiado al presente, aunque es evidente - y lógico - que lo que ha continuado invariante es la íntima relación existente entre la violencia, el poder, el orden y el desorden.

Pero lo que sí llama la atención es la fórmula combinatoria (violencia fáctica + violencia simbólica) que el gobierno del MNR y Paz Estenssoro inauguró el 6 de agosto de 1985 y cuya aplicación - a partir de un conjunto de racionalizaciones que han conseguido «restituir» la autoridad del ejecutivo, reacuartelar a los militares, expresar satisfactoriamente al gran empresariado privado y dismantelar la antigua coherencia de una oposición hoy semi-esclerotizada - ha llevado a que la violencia sea tenida como un aspecto de la cotidianidad, con todo lo que ello importa, en su incorporación, como parte de un proceso de reconfiguración del «sentido común» y de la eticidad compartida.

Esta rutinización de lo violento está directamente ligada, por lo tanto, a un uso dosificado de los «organismos de seguridad del Estado» (esto es, de los agentes del Ministerio del Interior) y de los cuerpos armados tradicionales (la policía y el ejército), así como al establecimiento de un «nuevo discurso del poder».

Esa bidimensionalidad de la «violencia democrática» en Bolivia ha sido exteriorizada en un marco legal explícito y totalizador, en formas concretas de represión abierta y en justificaciones multiplicadas por los sistemas informativos privados (que representan cerca del 90 por ciento de los que trabajan en el país).

La matriz de la violencia global

El principal slogan de la campaña proselitista del MNR para los comicios presidenciales de 1985 rezaba: «Para que el cambio sea total» y, efectivamente, tras la posesión de Paz Estenssoro, el 29 de agosto de ese año, se produjo un cambio completo en la lógica sistémica que ese mismo partido - bajo la presión de las masas populares - había construido en 1952.

El instrumento para eso que se consideró una «revolución de derecha» fue la Nueva Política Económica (NPE) inscrita con el número 21.060 de los decretos supremos.

«La patria se nos está muriendo» fue la frase lapidaria con la que el presidente Paz anunció la vigencia de la NPE, la que, en su parte considerativa, sostiene que se debe atacar «las raíces mismas de la crisis» (una crisis entendida como sinónimo de hiperinflación) e identifica como causas principales de tal situación al «sostenido y creciente déficit fiscal del sector público» y al «desajuste institucional del sistema administrativo del Poder Ejecutivo, cuyas funciones se han burocratizado desmedidamente». La causa de la crisis, en otras palabras, es el Estado.

Por consiguiente, el objetivo esencial de la NPE es sustituir al Estado por el mercado como mecanismo regulador de la economía, para lo cual contiene un conjunto coherente de disposiciones de corte neoliberal: libre uso de moneda extranjera en operaciones bancarias y comerciales, libre importación y exportación de bienes, conversión del oro físico del Banco Central en reservas de libre disponibilidad, libre contratación, «beneficio de relocalización» (despido con pagos sociales, pero sin reubicación), congelación salarial, fijación de precios de los productos de consumo básico por el libre juego de la oferta y la demanda, racionalización del personal en el sector público, descentralización de las empresas estatales del petróleo y la minería y disolución de la Empresa Nacional del Transporte Automotor y de la Corporación Boliviana de Fomento (industria).

Esa política, similar a la aplicada en otras naciones latinoamericanas, conllevó una refuncionalización del Estado, una redistribución del espacio político, una reconceptualización de las relaciones sociales, los lazos sociedad civil y Estado, las modalidades organizativas y los canales de gestión de demandas, y además un proceso de desideologización y reideologización general.

Mas, asimismo, hizo necesaria la puesta en acción de una coercitividad múltiple - aunque aparentemente asincrónica - y que estuvo respaldada por una terminología de fuerza que, poco a poco y ante la visible incapacidad rearticulatoria de la oposición y la dispersión de la protesta social, se ha flexibilizado relativamente.

Las formas de la violencia

Ya se dijo, de modo general, que la violencia de la democracia actuó en Bolivia en los niveles fáctico y simbólico. En el primero están tomadas en cuenta las manifes-

taciones de violencia patente y, en el segundo, aquellas correspondientes al ámbito persuasivo-conformador y que circularon más bien como exteriorizaciones discursivo-prácticas descriptivas, racionalizadoras o ejemplificadoras.

A continuación, sólo con propósitos ilustrativos, se sintetiza las formas que adoptó esa violencia bidimensional según su ocurrencia en el tiempo y no por su magnitud. a) En el nivel fáctico:

- El estado de sitio. Fue implantado dos semanas después de promulgada la NPE para contrarrestar la «huelga nacional de hambre» declarada por la COB, y por segunda vez en septiembre de 1986 como aspecto legal del monumental despliegue militar destinado a impedir que la Marcha por la paz y por la vida - protagonizada por cerca de 10.000 trabajadores mineros, amas de casa mineras, estudiantes, religiosos y educadores - llegara a la sede del gobierno. En cada caso se prolongó por 90 días y supuso la suspensión de las garantías y derechos constitucionales para decenas de dirigentes sindicales y políticos.

- El confinamiento. Aplicado contra la dirigencia de la COB y políticos opositores participantes en la huelga nacional de hambre contra la NPE y que fueron enviados a regiones inhóspitas («ubérrimas», para el entonces ministro del Interior, Fernando Barthelemy) del oriente del país, y que fue mantenido como amenaza para los «desestabilizadores» del modelo hasta la huelga cobista de marzo de 1987, cuando menos.

- El cerco militar. Respaldó al segundo estado de sitio y rodeó, en la localidad altiplánica de Calamarca - con la movilización de efectivos armados con fusiles de repetición automática, carros de asalto, tanques de guerra y con vuelos rasantes de aviones cazabombarderos -, a la multitudinaria marcha que hasta ese momento había recorrido unos 190 kilómetros a pie en rechazo de la política minera y económica del gobierno.

- La represión callejera. Fue el recurso más utilizado. En 1985 el Ejecutivo aprobó expresamente un presupuesto de medio millón de dólares para la adquisición de bombas de gases lacrimógenos y la policía perfeccionó a su Grupo Especial de Seguridad, dotándolo de motocicletas, con balas de goma, bastones eléctricos, además de que recibió cooperación técnica especializada de instituciones policiales extranjeras (como la de Francia). Todos los sectores sociales fueron sus víctimas: amas de casa mineras, profesores rurales y urbanos, estudiantes de colegio y universidad, comerciantes minoristas, campesinos, productores de hoja de coca, jubi-

lados, obreros, ex-trabajadores de las minas, trabajadores de la prensa, etc.

- Los despidos colectivos. El gobierno despidió a más de 23.000 trabajadores de la estatal Corporación Minera de Bolivia y alentó, con su política de «relocalización» y libre contratación, el retiro de otros varios miles de obreros del sector privado, de funcionarios del Banco Central, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, etc. Sobre una población económicamente activa estimada en 2,3 millones de personas, la Conferencia Episcopal Boliviana dijo en 1988 que la desocupación alcanzó el 25 por ciento, mientras que las autoridades sólo admitieron un máximo del 11 por ciento.

- Las remuneraciones insuficientes. Aunque el índice inflacionario superó en todos los años las previsiones oficiales, el Ejecutivo sólo otorgó un incremento salarial del 10 por ciento anual, sobre un haber básico de 60 bolivianos (cálculase ese monto al cambio actual de 2,79 bolivianos por dólar). Se suma a esto la eliminación de todas las bonificaciones y de las subvenciones vigentes hasta agosto de 1985. La canasta familiar calculada por la COB asciende a un mínimo de 200 dólares por mes.

- Los asesinatos «legitimados». La policía, la unidad policial antinarcóticos y la Armada, en el cuatrienio, victimaron a cerca de 20 personas con pretextos «legales». En todos los casos, los muertos fueron parte de la población civil y desarmada.

- El acallamiento de medios. La destrucción y robo de equipos de la Televisión Universitaria de La Paz; la voladura de las instalaciones de Radio Tarija, en la ciudad del mismo nombre; la intervención oficialista de la radio Campesinos Bolivia, de Oruro, y la pretensión de cerrar varias emisoras sindicales mineras por problemas de legalización de su funcionamiento, son parte de esta faceta de la violencia. Igualmente, figuran en ella el allanamiento de las oficinas del semanario opositor Aquí y el encarcelamiento de su director por 30 días (acusado de difamar al Ejecutivo) y la suspensión temporal de la radioemisora y el canal televisivo del llamado Sistema de Radio-Televisión Popular, por un año, cuyo propietario-director fue acusado de «apología del delito» y «difamación» tras la entrevista telefónica que transmitió con el ex «rey de la cocaína», Roberto Suárez Gómez⁶.

⁶En los dos últimos casos citados, el gobierno desconoció los procedimientos legales (particularmente la Ley de Imprenta de 1925) y recurrió directamente a la justicia ordinaria y a simples mecanismos resolutivos ministeriales. Sin embargo, en el asunto de la entrevista a Suárez Gómez, detenido un mes después gracias al «monitoreo» hecho en la ocasión por la Drug Enforcement Administration, su hijo Roberto Suárez Levy sostuvo que se trató de una «conversación concertada» y no «sorpresiva».

- El cierre de fábricas. La puesta en vigor de la NPE provocó, según afirmaron directivos de la Cámara Nacional de Industrias y dirigentes de la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia, el cierre de más de centenar y medio de fábricas, medianas y pequeñas, particularmente debido a la influencia creciente del contrabando.

b) En el nivel simbólico:

- La «cosmovisión 21.060». El bloque de determinaciones que compone la NPE interpeló a los bolivianos por encima de las ideologías, negando las posiciones contradictorias objetivas de los grupos en el proceso productivo y la estructura social, identificó al Estado como el «enemigo número uno», cambió el patrón de acumulación, fue planteado como el «único camino» para «salvar a la Patria», buscó convencer de que está dirigido a atacar las «causas reales de la crisis», dispersó a la oposición sindical y política y fundamentó el rechazo de las demandas colectivas fragmentadas y la recurrencia a la represión con la «necesidad racional» de «administrar bien los recursos escasos».

- La informalización. Resultante de la implantación de la NPE, es la explosión de las actividades económicas informales, explicable sólo como la búsqueda colectiva de alternativas de sobrevivencia frente a los altos índices de desempleo y subocupación. Comprende un proceso general de desproletarización, el incremento de los «trabajadores urbanos por cuenta propia» - sobre todo pequeños comerciantes que se nutren del «contrabando hormiga» o de la producción agrícola de pequeñas parcelas -, el de los «asalariados» que cumplen diversas funciones en la fabricación ilegal de cocaína y en el de los grandes comerciantes y «librecambistas»⁷ ciudadanos que facilitan la inserción de los dólares «negros» en el mercado formal.

- La privatización. El gobierno alentó la privatización de diversas actividades mediante acciones directas y estímulos indirectos. Entregó el control aduanero a compañías transnacionales, apoyó el surgimiento de centros educativos y de atención médica particulares, a través de significativos recortes en los presupuestos públicos

⁷En 1987 la Cámara Nacional de Comercio estimó en 110.000 el número de puestos de venta de ropa, productos de belleza y electrodomésticos instalados en los «mercados negros» de todas las capitales bolivianas y conocidos comúnmente como «miamicitos». A esa cantidad debe sumarse el total de vendedores ambulantes que ofrecen patatas, caramelos, posters, etc., y que pueblan todas las ciudades y localidades importantes del país (piénsese, por ejemplo, en las anteriormente combativas poblaciones mineras de Llallagua y Siglo XX, transformadas hoy en impresionantes mercados). Asimismo, los «librecambistas» - personas que cambian dólares por moneda nacional - florecieron por cientos y la divisa estadounidense (que es adquirida por el Banco Central sin que interese su procedencia, tal como establece el decreto 21.060) es de circulación corriente, aun en los expendios de alimentos.

de esos dos renglones, anunció sus intenciones de privatizar las empresas nacionales de telecomunicaciones y ferrocarriles, decretó la cooperativización de varias empresas mineras estatales, amplió la explotación petrolífera por parte de firmas extranjeras, etc.

- La especulación noticiosa . Permanentemente se recurrió a la distorsión informativa (en el caso de la llegada inconstitucional de tropas estadounidenses en julio de 1986 «para combatir el narcotráfico»; en todos los casos de represión callejera y matanzas rurales; en ocasión de los asesinatos del biólogo Noel Kempff Mercado y del diputado izquierdista Edmundo Salazar por elementos del narcotráfico; en las «fugas» de varios importantes traficantes de las cárceles públicas o en su sobreseimiento por ciertos jueces, etc.), y la aliada del MNR, la Acción Democrática Nacionalista (ADN), jefaturizada por el ex-dictador Bánzer, creó un clima de tensión propiciatoria antes y después de las elecciones respecto de una improbable presencia de la guerrilla peruana de «Sendero Luminoso» en territorio boliviano, lo que coadyuvó, en abril de 1989, a que un nuevo contingente de 300 militares del Comando Sur de los EE.UU. se instalara en el país con el argumento de «realizar tareas de acción cívica».

- El control ideológico . Aparte de que el entorno discursivo de la NPE se alimentó de una terminología desideologizadora y reideologizadora, el gobierno del MNR hizo un trabajo en dos dimensiones para facilitar el reajuste de mentalidad necesario para que su proyecto refundador del capitalismo (Henrich) alcanzara estabilidad. Una de ellas, que sí se concretó, fue la legalización - mediante un reglamento ministerial - del «boom» de estaciones privadas de televisión (más de 50) que comenzó en 1984 con pleno desconocimiento de las disposiciones que señalaban el derecho privativo del Estado para usar el espectro radioeléctrico en materia de TV. Y la otra, que no fructificó, fue la del plan del Ministerio de Educación y Cultura para ejecutar una reforma educativa que fue resistida por los sectores populares.

Algunas violencias específicas

Aunque ya se anotó que, en la práctica, ningún sector de la sociedad se pudo librar de la violencia - tanto de aquella totalizadora de la NPE, como de la «restringida» que fue ejercitada con criterio de oportunidad -, no se debe dejar de mencionar un grupo de acontecimientos cuyas características y repercusiones evidencian la violencia con la que se produjo la remodelación global del modelo estatal instaurado en 1952:

1) La «relocalización» . Las víctimas directas de esta determinación oficial fueron los trabajadores de las minas, de las fábricas, de las instituciones estatales. Muchos de ellos percibieron exiguos pagos a título de «beneficios sociales» y en su mayoría quedaron sin posibilidad alguna de conseguir un empleo permanente.

Esta política de despidos repercutió, por una parte, en la multiplicación del comercio informal, en el hallazgo de la economía subterránea del narcotráfico como fuente generadora de puestos de trabajo (para «pisa-cocas», vigías y transportadores, sobre todo) y en el aumento de la miseria; pero también, por otra, en el acelerado debilitamiento de las otrora poderosas organizaciones sindicales, principalmente de la COB y de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia⁸, considerada ésta hasta entonces como la «vanguardia» del movimiento proletario boliviano.

La descomposición del obrerismo organizado, resultante asimismo de la errónea conducción de la COB por Juan Lechin Oquendo y algunos grupúsculos radicales durante la gestión gubernamental de la Unidad Democrática y Popular (1982-1985), cuando la dirección cobista se equivocó de enemigo y pensó que las «condiciones objetivas y subjetivas» para la revolución estaban dadas, ha llevado a que el sindicalismo pierda su credibilidad, su capacidad de convocatoria (interpeladora) y su presencia activa en el proceso político y aparezca aislado en una zona de acción periférica (la de lo meramente «declarativo»), y hace temer su próxima «toma» por grupos neoconservadores.

2) Los presupuestos antipopulares . Como consecuencia de la aprobación de los presupuestos fiscales restrictivos de 1987 y 1988, dos fueron los sectores más afectados: la educación y la salud públicas. Este hecho, además, supuso la fijación de ínfimos salarios para los profesores de las áreas urbana y rural⁹, al igual que una congelación de las paupérrimas pensiones de los jubilados y de los ex-combatientes de la guerra con el Paraguay (1932-1935), aparte de que implicó la eliminación

⁸Esta Federación contaba en agosto de 1985 con 27.568 afiliados, pero gracias al «programa de relocalización» y a consecuencia de los efectos de la crisis internacional de los precios del estaño, ocurrida en octubre de ese año, para mayo de 1987 los trabajadores de la estatal Corporación Minera de Bolivia sólo llegaban a 5.173 hombres, según datos del Secretariado Nacional de Pastoral Social dependiente de la Conferencia Episcopal Boliviana.

⁹Esto condujo a que las federaciones departamentales y confederaciones nacionales de educadores declararan constantemente huelgas de protesta - por las que el gobierno les descontaba montos variables de sus haberes - y hayan celebrado con una paralización «de júbilo» el cese de las funciones del ministro del sector, Enrique Ipiña, el 4 de agosto de 1989, a dos días de la transmisión del mando presidencial.

de la cobertura que el Estado garantizaba, en la dimensión social, a sus trabajadores en edad de retiro¹⁰.

Contrariamente, las asignaciones estatales para los sectores improductivos encargados de la represión no sólo fueron mantenidos, sino incluso incrementados. Esa fue la base fundamental para lograr que los militares «respetaran la Constitución» y no se vieran atraídos, como lo estuvieron durante las dos décadas anteriores, por las tentaciones de usufructuar directamente el poder.

- La guerra contra los cocaleros . Los agricultores de las zonas semitropicales de los Yungas, en La Paz, y de El Chapare, en Cochabamba, constituyeron el «blanco» principal de la «lucha contra el narcotráfico». Mientras, los verdaderos responsables de la producción y comercialización de cocaína permanecieron intocados, y si alguno de ellos fue casualmente aprehendido consiguió «fugar» sin inconvenientes, o ser «sobreseído» por la justicia.

La Unidad Móvil para el Area Rural (UMOPAR), grupo especializado de la policía boliviana para combatir el tráfico de drogas y que fue creado, financiado y entrenado por los EE.UU. en 1983, perpetró una serie de atropellos en contra de los pobladores civiles. Ejemplos de estos hechos son los siguientes casos:

- El 27 de junio de 1987, en la localidad de Villa Tunari (El Chapare), donde la UMOPAR tiene establecido un cuartel, los efectivos de esta fuerza dispararon indiscriminadamente contra una multitud desarmada que solicitaba el traslado de los soldados por «los abusos que cometían», aunque la versión oficial refirió una «tentativa de asalto del cuartel». Los resultados verificados por una comisión de Derechos Humanos fueron 8 personas muertas, 13 heridas, 2 desaparecidas y 1 detenida.

- El 25 de octubre de 1988 en la población nororiental del Guayaramerín, próxima a la frontera con Brasil, la UMOPAR, apoyada por helicópteros estadounidenses, atemorizó durante varias horas a los habitantes del lugar al protagonizar un sitio destinado a «capturar a algunos peces gordos del narcotráfico» que jamás aparecieron.

- El 24 de mayo de 1989, en la población de Santa Ana de Yacuma, al noreste de La Paz, la UMOPAR virtualmente «invadió» la zona atemorizando a sus habitantes a

¹⁰La antigua Caja Nacional de Seguridad Social fue convertida, a ese efecto, en Caja Nacional de Salud.

las 4 de la madrugada. La transcripción de las comunicaciones entre los tripulantes de los helicópteros utilizados entonces y los efectivos que se hallaban en tierra que publicó el diario católico Presencia develaron el carácter sanguinario de esa acción, que fue justificada con la presunta conversión de la citada población en «plaza fuerte» de los traficantes. El resultado: 5 civiles muertos, uno de ellos victimado cuando realizaba sus ejercicios matinales en las calles de Santa Ana y, como en las oportunidades antes mencionadas, ningún narcotraficante detenido¹¹.

Similares actos de violencia se han repetido en diferentes regiones y fechas y casi siempre los afectados han sido los campesinos.

Otra prueba es la Ley 1.008 (Régimen especial de la coca y sustancias controladas) que, inicialmente, pretendió definir a la hoja de coca en sí misma como estupefaciente y que genera una constante incertidumbre entre los agricultores respecto del probable uso de procedimientos químicos y métodos coactivos para reducir los cocaes. Sin embargo, el narcotráfico puede ser mejor combatido con la lucha contra la demanda de la droga o, como afirmó el ex-diputado socialista Roger Cortez, investigando las cuentas bancarias y las nuevas fortunas de ciertos personajes.

La dinámica simulación/disimulo

La puesta en vigor de la NPE con sus consiguientes efectos colaterales ha ubicado en el centro de la cotidianidad la dinámica de la simulación y el disimulo. La primera hace que lo inexistente parezca existente, y la segunda, a la inversa, desconoce la existencia de lo existente.

En el primer aspecto, la propaganda oficiosa generó una imagen - internacionalmente, sobre todo - respecto de un «milagro boliviano» que se asentó en dos hechos básicos: la contención eventual (y gracias a un elevado costo social) de la espiral inflacionaria iniciada en 1981, y la paulatina recuperación gubernamental de la credibilidad de los organismos financieros internacionales, atribuible a la predisposición demostrada para honrar la deuda.

Y, en el segundo, se pretendió negar la agudización del drama de la mayoría poblacional y el carácter recesivo del modelo económico.

¹¹Evidentemente, el número de hectáreas de cultivo de hoja de coca se ha multiplicado (de 1970 a 1986 aumentó de 4.450 a 70.998), pero ello es explicable por la creciente demanda de cocaína que se origina en los EE.UU. y Europa, por el encubrimiento oficial de los traficantes (sobre todo durante los gobiernos dictatoriales de Banzer y García Meza) y por la falta de empleo.

Lo cierto, empero, fue que lo único «milagroso», sorprendente y sugestivo estuvo representado por la manera estoica y hasta conformista con que los sectores populares de la sociedad boliviana soportaron - y todavía lo hacen - el castigo económico.

Se puede concluir con estas consideraciones puntuales:

(a) La violencia es intrínseca a la mundivisión contenida en la NPE, y ésta no pudo haber sido llevada a la práctica sin su correlato de acciones coercitivas, de grado y forma variables.

(b) Los objetivos de esa violencia pueden ser sintetizados en los siguientes:

1. Reducir la realidad a términos manejables para el grupo dominante
2. Refuncionalizar el Estado para refundar el capitalismo
3. Echar los cimientos para la edificación de un proyecto «nacional» totalizador de largo plazo e inscrito en la lógica transnacional, y
4. Perfeccionar a la víctima, «naturalizando» su estado.

(c) La eficacia del modelo de la dominación ha transitado regresivamente desde la «democratización de la violencia» a la violencia de la democracia.

(d) El ejercicio de la violencia se ha hecho cosa de rutina. Por ejemplo, a finales de abril de 1989 un grupo de ex-trabajadores mineros realizó una huelga de hambre en las calles de La Paz en demanda del pago de reajustes a sus exiguos beneficios sociales cobrados, y como no obtuvo respuesta decidió expresar su reclamación con la «autocrucifixión» de sus miembros en los mástiles y verjas del edificio central de la Universidad Mayor de San Andrés. La gente reaccionó irónicamente y las autoridades - los por entonces ministros de Relaciones Exteriores y de Informaciones, Valentín Abecia y Herman Antelo, respectivamente y entre otros - se limitaron a decir que esas demostraciones iban «contra la estética urbana».

(e) La violencia general tiene relación directa con el principio de la competitividad y con la meta neoliberal de la persistente búsqueda de la autorregulación del mercado (la desregulación).

(f) El gobierno no solamente usó los tradicionales aparatos de fuerza, sino también un conjunto coordinado de medidas legales y económicas y de manifestaciones ideológico-discursivas para imponer sus esquemas y reglas de juego.

(g) Sin embargo, no es posible hablar de una «política de terrorismo de Estado» y quizá sí de un «terrorismo respecto del Estado», a fin de redimensionarlo hasta reducirlo a mero árbitro - aunque sujeto a control - del mercado de capitales, bienes, servicios y trabajo.

(h) Tampoco se puede hacer referencia a un estado de violencia, sino a un Estado predispuesto a la violencia y dentro del cual tienen lugar actos de violencia «necesaria» (más represiva que autodefensiva).

(i) Esta violencia, empero, no consigue polarizar a las fuerzas sociales ni focalizar el conflicto; al contrario, posibilita la fragmentación de sus filas, objetivos y estrategias.

(j) La oposición izquierdista, sindical y popular - que aún no logra comprender correctamente las coordenadas que definen la nueva realidad - se ha segmentado y está imposibilitada de articular las demandas y las iniciativas de los distintos sectores sociales en un bloque compacto y capaz de alcanzar un equilibrio distinto.

(k) Finalmente, se puede afirmar que la posibilidad de la violencia no disminuirá en el futuro inmediato, sino que su ocurrencia se prolongará a medida que el diseño de la NPE tienda a ser mejorado y perpetuado y en cuanto el movimiento popular reasuma formas orgánicas y efectivas de respuesta.

Referencias

*Almaraz, Sergio, EL PODER Y LA CAIDA. EL ESTAÑO EN LA HISTORIA DE BOLIVIA. - La Paz, Edit. Los Amigos del Libro. 1980; Zavaleta, R. -- Bolivia: evolución y crisis del movimiento obrero.

*Anónimo, LO NACIONAL-POPULAR EN BOLIVIA. - México, Siglo XXI Edit. 1986

*Baldivia, José, NUEVA SOCIEDAD. 83. p103-114 - 1986; Abril de 1952: la democratización de la violencia.

*Barrios, Raúl, PATRIA GRANDE. 3. p14-17 - La Paz. 1985; Salud mental, paz y terrorismo de Estado.

*Centro de Documentación e Información, VII CONGRESO DE LA COB; DOCUMENTOS Y RESOLUCIONES. - La Paz. 1988; Apuntes sobre la nueva política económica.

*Ginsberg, Enrique, NUEVA SOCIEDAD. 89. p180-191 - 1987; Respuestas cristianas ante la problemática actual.

*Henrich, Tyronne, REPENSANDO EL PAIS. - La Paz, Movimiento Bolivia Libre. CATEP. 1987; Reflexiones sobre la violencia.

*Iriarte, Gregorio, ESQUEMAS PARA LA INTERPRETACIÓN DE LA REALIDAD. 10 - La Paz, Edic. SENPAS. 1985; Las masas en noviembre.

*Klein, Herbert, HISTORIA GENERAL DE BOLIVIA. - La Paz, Edit. Juventud. 1982;

*Piccini, Mabel, PONENCIA PRESENTADA AL II FORO INTERNACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL. p15 - Universidad de Lima. 1987;

*Toranzo, Carlos; Arrieta, Mario, NUEVA DERECHA Y DESPROLETARIZACION EN BOLIVIA. - La Paz, ILDIS. 1989;

*Zavaleta, René, BOLIVIA: EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA NACIONAL. - 1967;

*Zavaleta, René, BOLIVIA, HOY. - México, Siglo XXI Edit.. 1983;